

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-14043-2020
CARATULADO	: DIXON/FISCO DE CHILE- CDE

Santiago, veinticuatro de Noviembre de dos mil veintidós

### VISTOS,

Comparece con fecha 12 de septiembre de 2020, don Antonino Pocorobba Castiglione, abogado, domiciliado en Huérfanos 779 oficina 1001, comuna de Santiago, en representación de don **Jorge Adolfo Dixon Rojas**, ingeniero electrónico, domiciliado en Víctor Rae 5644, Las Condes, Santiago, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de hacienda en contra del **Estado de Chile**, representado por el presidente del Concejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en Agustinas 1687, Santiago, solicitando se declare que el daño ocasionado a su representado por agentes del estado asciende a la suma de \$1.200.000.000.- y se ordene a pagar dicha cantidad al demandado en favor de su representado; que la Fuerza Aérea de Chile, en un acto público deberá incluir una placa conmemorativa instalada en la Academia de Guerra de dicha institución, el nombre del subteniente don Jorge Adolfo Dixon Rojas, por ser unos mismos hechos lo que padeció el demandante de autos, al de sus compañeros de armas que se encuentran nominados en esa placa conmemorativa y que mitiga su honor de oficial de la fuerza aérea; debiendo el Fisco, instruir para tal efecto al Ministerio de Defensa, para el cumplimiento de lo resuelto; que la suma que se ordene pagar, deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de la presente demanda hasta su pago efectivo, más los intereses legales que correspondan por el mismo periodo señalado y que la demandada deberá pagar las costas de la causa.

Expresa como fundamento de su demanda, que a consecuencia de la ruptura democrática acaecida por el Golpe de Estado del año 1973 y de haberse asumido por la Junta Militar de Gobierno las facultades legislativas, el poder constituyente, el gobierno y el sometimiento a control de las sentencias en los procesos dictadas por el poder judicial, se produjo un sin número de hechos y situaciones abusivas que significaron la producción de ilícitos penales, calificados de "lesa humanidad" entre cuyas víctimas se encuentra su representado, quien a comienzos de 1968, teniendo 16 años, ingresó como cadete a la Escuela de Aviación Capitán Ávalos, transcurriendo sus años de formación en un ambiente cálido, de gran camaradería,



Foja: 1

obteniendo las mejores calificaciones. Relata que concluida su formación profesional se recibió como oficial FACH con el grado de subteniente, en diciembre de 1972, como primera antigüedad en el escalafón de Ingeniería Aeronáutica y en enero de 1973 fue destinado a la Academia Politécnica Aeronáutica de la Fach, para continuar sus estudios profesionales de ingeniería. Indica que en este contexto en mayo de 1973 y como parte de su formación profesional, efectuó un viaje de instrucción por el pacífico sur con sus compañeros oficiales, en donde visitaron diversos países como Australia, Nueva Zelandia, Japón y China, llamando la atención de su representado la amabilidad manifestada por el gobierno Chino a la delegación chilena, lo que comentó en su oportunidad a sus compañeros de armas. En estas circunstancias le sorprendieron los sucesos del 11 de septiembre de 1973, siendo comisionado para hacerse cargo de la seguridad del Aeropuerto Internacional de Santiago, Comodoro Arturo Merino Benítez, sin mayor compromiso con las acciones contingentes.

Señala que sin que mediara ninguna situación anómala, con fecha 15 de octubre de 1973, fue citado a la Base Aérea de Colina para un interrogatorio, encontrando a su llegada a un subteniente, compañero de la escuela de aviación, que con desprecio le dijo que lo matarían.

Fue interrogado por un Coronel de Aviación, a quien expresó no tener problemas con el mando superior militar, ya que cumplía fielmente desde hacía un mes las funciones encomendadas y sin reparos en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Terminada esa audiencia, fue conducido a la Academia Politécnica Aeronáutica, (APA), en donde de improviso y sin aviso alguno se sintió encañonado por un oficial, que le apuntaba directamente a su nuca con una pistola, obligándosele a despojarse de sus distintivos militares, siendo conducido a una de las salas de clase de dicha Academia. Llegada la noche, se le amarró de las manos y encapuchó, siendo conducido a la Academia de Guerra Aérea (AGA). A su llegada fue llevado a un subterráneo y dejado frente a una pared, esposado y encapuchado, toda la noche. Por cada vez que apoyaba su cabeza en el muro para descansar, recibía un culatazo del guardia que estaba a cargo de la vigilancia.

Continúa su relato indicando que en la mañana del 16 de octubre de 1973 fue conducido encapuchado a interrogatorio, reconociendo la voz del oficial a cargo, superior directo suyo en la Escuela de Aviación, en donde, previo a las preguntas, un ayudante le infringía puñetazos directos al estómago, conminándolo a declarar. Interrogado, declaró sobre el viaje de instrucción al pacífico sur, su visita a China, destacando que le sorprendió el buen trato recibido, sus estudios en la Academia Politécnica y su paso por un curso de economía en la Universidad de Chile, gestionado por el capitán Raúl Vergara, piloto de guerra e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, quien era ayudante del General Alberto Bachelet, por lo que, para la Fach el hecho de haberlo visitado a su oficina era considerado conspirativo y sospechoso de actuaciones en contra de la institución.



Foja: 1

Relata que por no tener mayor contacto respecto de las personas por las que se le interrogaba, no pudo dar mayores respuesta al interrogatorio, siendo fustigado con distintos golpes para responder preguntas vagas, imprecisas y que suponían actuaciones o planes ignorados por su representado, por lo que, maltrecho, fue llevado a otra sala, en donde lo despojaron de su ropa e interrogaron colgado de sus brazos, conectado a un sistema de corriente eléctrica, conectando un electrodo en el pulgar de su mano izquierda y otro que desplazaban por su boca, genitales y otras partes de su cuerpo. Afirma que durante las horas que duró el interrogatorio, los golpes de corriente le hacían perder la respiración y quedar semi inconsciente.

Sostiene que al día siguiente, se le entregó a su representado la declaración que había efectuado el día anterior para su firma, respecto de la cual solicitó se eliminaran párrafos incriminatorios para con la institución y oficiales de la FACH que no había declarado durante el interrogatorio y como el oficial encargado se llevó la declaración sin firma, fue conducido al “ablandamiento” en donde se le proporcionó otra golpiza. Entendiendo que nada podía hacer, firmó la declaración fraudulenta obtenida bajo torturas y tormentos. Así, en la noche del 17 de octubre de 1973, fue llevado de vuelta a la Academia Politécnica, en donde junto a otros detenidos, recibe diversos tratos vejatorios y queda incomunicado hasta fines de noviembre de 1973, encontrándose con diversos oficiales y funcionarios de la FACH quienes relataban experiencias iguales o similares a las que debió soportar.

Aduce, que entre noviembre y diciembre de 1973, fue trasladado a la Galería N°2 de la Cárcel Pública de Santiago y a principio de 1974, dicho recinto carcelario, se convierte en el lugar de encierro de todos los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Afirma que los detenidos pasaron a ser procesados, en virtud de las declaraciones obtenidas bajo tortura, como conspiradores y por traición a la patria, en la causa Rol 1-1973 “Aviación contra Bachelet y otros”.

En particular, indica, que las acusaciones contra su representado decían relación con un plan “presunto”, no probado y falso, que tenía por objeto hacer explotar la APA. El proceso terminó con sentencias del tribunal militar, Concejo de Guerra, con la sentencia dictada con fecha 30 de julio de 1974 en virtud de las declaraciones falsas obtenidas bajo tormento y tortura sistemática, dictaminándose penas de muerte y otras de distinto rango.

Agrega que a su representado le correspondió la pena de 4 años de presidio militar menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos por el tiempo de duración de la condena, por su participación en calidad de autor del delito de conspiración para la sedición tipificado en el artículo 278 del C.J.M.; condena que fue confirmada por el Juez Militar, General de Brigada Aérea, José Berdichewsky Scher, con declaración, de la extensión de la pena rebajada a 541 días de reclusión militar, menor



Foja: 1

en su grado medio, como autor del delito de incumplimiento de deberes militares.

Expone que por decreto Exento N° 1.611, de 30 de octubre de 1974, se le concedió un indulto, procediendo pocos meses más tarde a abandonar el país con rumbo a Canadá, de donde regresa a Chile a fines de julio del año 1990, que antes de dictarse la sentencia del caso Rol 1-73, administrativamente se decretó la desvinculación absoluta de su representado y el retiro absoluto del servicio de la Fuerza Aérea de Chile, mediante el Decreto Supremo (Av.) N° 810, de fecha 07 de noviembre de 1973, a contar del día 30 de noviembre del mismo año, sin fundamento alguno que se indique en el texto de ese decreto, ni sumario administrativo previo, ocasionándosele una serie de perjuicios materiales y la pérdida total de sus derechos previsionales. Hace presente que don Jorge Dixon Rojas, se encuentra contenido en la Nómina de víctimas reconocidas por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el año 2004, también conocida como “Comisión Valech”, bajo el número N° 7.407.

Refiere que los hechos descritos, son y constituyen delito de lesa humanidad, cometidos por agentes del Estado, que bajo un sistema autoritario, impuesto por el gobierno militar en un quiebre democrático, persiguió la eliminación sistemática de quien se opusiera a su gestión, o, incluso se piense que se pudiera oponer; llegándose en la imposibilidad de incriminar por hechos efectivos a los acusados, en formularles cargos inexistentes e inespecíficos, obtenidos bajo tormento y tortura sistemática, tal y como le ocurrió a su representado, quien los ha descrito en el libro “Aviación, contra Bachelet y otros”.

Agrega que la calificación de los hechos referidos como delito de lesa humanidad, y la prueba específica a su caso, se amerita de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Justicia, referida a todos los condenados en el proceso Rol 1-73, que acompaña en otrosí.

Afirma que dicha sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, dispuso por unanimidad de sus miembros:

(i) que la sentencia pronunciado constituye, per se, una forma de reparación; (ii.) que el Estado debe continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación de los hechos del presente caso; (iii.) que el Estado debe realizar las publicaciones que exige el fallo, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la sentencia; (iv.) que el Estado debe, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; (v.) que el Estado debe, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la sentencia, develar una placa con la inscripción de los nombres de las víctimas del caso; (vi.) que el Estado debe poner a disposición de las víctimas del presente caso, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la sentencia, un mecanismo que sea efectivo y rápido para revisar y anular las sentencias de condena que fueron dictadas en la referida causa en su perjuicio, señalando, además, que ese mecanismo deber ser puesto a disposición de las demás personas que



Foja: 1

fueron condenadas por los Consejos de Guerra, durante la dictadura cívico-militar chilena; (vii.) que el Estado debe pagar, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, la cantidad fijada por concepto de daño inmaterial ocasionado a las víctimas del caso; (viii.) que el Estado debe pagar, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, las cantidades fijadas por concepto de reintegro de costas y gastos; y, (ix.) que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la misma”.

Hace presente que a consecuencia del Fallo de la Corte Interamericana; la EXMA CS., conoce del Recurso de Revisión Rol 27.543/2016, acogido por sentencia de octubre de 2016, anulando el proceso Rol 1-73 indicado, dictándose respecto de todos los condenados, sentencia absolutoria, declarándose su total inocencia y estableciendo la tortura y tormentos sufridas, como su privación legítima de libertad y daños ocasionado ya referidos.

Argumenta que lo hechos descritos, consistentes en tomar detenidas a personas sin cargos específicos, sacarlas de su actividad normal sin hechos que ameriten la privación de libertad, sin dirigir en contra de los acusados una investigación previa, constituye un delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el art 141 y de Tormentos y Flagelaciones en el art 150, ambos del Código Penal, y que, en mérito del mismo fallo de revisión se constatan los delitos de prevaricación, cometidos por quienes intervinieron en la conducción de los procedimientos establecidos en el código de Justicia militar, que en caso alguno contemplaba y nunca contempló las actuaciones que tuvieron los Agentes del Estado, para con su representado y muchos otros presos políticos, que sufrieron un juicio injusto y sin las garantías procesales mínimas como advierte el fallo del Tribunal Interamericano de Justicia y la sentencia de revisión de la Excm. Corte Suprema y refiere, como sustento normativo de su pretensión a la Convención de Ginebra, en particular su artículo 147; al estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, el año 1998, y recoge la normativa pre existente de Naciones Unidas, como el “Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg”, refrendado por la resoluciones a de la Asamblea General de ONU de 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946, y que establece la sanción de estos hechos de carácter intolerables, en virtud de los cuales sostiene que los hechos relatados son una palmaria demostración de delitos de Lesa Humanidad, cometidos por Agentes del Estado y que acreditados los hechos, sólo corresponde indemnizar a las víctimas.

Seguidamente, en cuanto a la responsabilidad del Estado, indica que las normas que la consagran están conformadas por un conjunto de principios de derecho público, y en su esencia su fuente esta originada en la Constitución y diversas leyes de carácter público invocando los artículos 5 inciso segundo, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, en virtud de los cuales sostiene que ninguna



Foja: 1

duda cabe sobre la responsabilidad del Estado, que reglada en la C.P.R., es una responsabilidad, que este letrado considera como directa, por estar contenida en el pacto social, y para otros, de carácter extracontractual.

Aduce, en cuanto a la aplicación de normas de derecho internacional que, los principios jerárquicos sobre responsabilidad del Estado, se vienen elaborando desde la Carta Magna 1215, dando paso a diversos principio internacionales que societariamente en torno al bien común deben respetar los Estados y la Comunidad Internacional, en resguardo de sus miembros, de las personas y de la dignidad humana, que vinculan al Estado de Chile al cumplimiento de las resoluciones, acuerdos y estatutos de la Carta de la ONU y de la Organización de Estados Americanos, así como de los principios contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre, La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como de la Convención de Derechos Humanos, todos los que establecen una responsabilidad objetiva del Estado, de modo que verificada una conducta lesiva que provoque daño, el Estado se encuentra obligado a indemnizar, con prescindencia a la voluntariedad de la acción, por violación de normas obligatorias que informan la actividad del Estado y que dan origen a su existencia, en virtud de las atribuciones entregadas por la sociedad para el cumplimiento de sus finalidades, de modo que, las normas aplicables para establecer la responsabilidad del Estado en estos casos, queda constreñida a las normas de aplicación publica, excluidas las del ámbito privado.}

Alega, a continuación, la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, invocando como sustento la sentencia Rol 6715-2002 de la ltima. Corte de Apelaciones de Santiago, y agrega que la magnitud y opresión, generada por el conjunto de potestades que se entregan al “Estado”, ejercidas indiscriminada y arbitrariamente producen tan graves transgresiones, de una entidad y envergadura superior de responsabilidad; cuestión que las normas privadas no contemplan en la generación del daño y su entidad, para resolver un daño de tales características, como el ocasionado entre particulares, cuyo interés, aun siendo importante, es distinto, traspasando en estos casos lo patrimonial, ya que intrínsecamente se atenta contra la esencia espiritual de quien recibe el daño.

Seguidamente, sostiene la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en delitos de lesa humanidad, invocando como fundamento el deber de reparación que recae sobre el Estado, en virtud de lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Constitución Política de la República. Agrega que las reparaciones que ha hecho el gobierno, en cumplimiento a lo ordenado por el fallo de la Corte Interamericana son sólo reparaciones de carácter general, y concluye que el Estado de Chile en calidad de miembro del sistema Interamericano, se encuentra obligado en estos casos a reparar



Foja: 1

Íntegramente el mal causado. Esta Obligación del Estado, por la violación de la norma internacional de que se trata, trae aparejado el deber de reparación que el daño producido, disponiendo la restitutio integrum, o restablecimiento a la situación anterior y agrega que de no ser esto posible se deben adoptar medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones han tenido la virtud de ocasionar, así como disponer la indemnización que compense por los daños ocasionados, sin que el Estado obligado pueda hacer primar, disposiciones de derecho interno que puedan alterar o llevar o evitar la obligación de reparar. Refiere como sustento de su tesis lo dispuesto en fallo de la Excma. Corte Suprema Rol 559-2004.

En cuanto al daño ocasionado, destaca el que se haya truncado la carrera profesional de un joven oficial, que contaba con calificaciones de mérito, procediéndose sin antecedentes que lo justificaran a su expulsión de la institución, trayendo aparejada la pérdida de beneficios previsionales y de salud. Indica que este daño moral, conlleva también una pérdida de carácter material, consistente en los emolumentos que dejó de percibir entre los grados de subteniente a coronel, al cual estima previsible llegara de acuerdo a su hoja de servicios. Sostiene que si se consideran los sueldos de cada grado en valores presente, el daño patrimonial por esa expectativa cierta de continuar en la institución mediante un desempeño normal, asciende a la suma de: \$804.324.000.-

Reclama, además, la pérdida de sus derechos previsionales que no le fueron reparados como a otros oficiales y suboficiales del proceso Rol 1-73. Indica que a su representado solo se le otorgó una pensión solidaria por el IPS que hoy asciende aproximadamente a \$180.000.- mientras que, según indica, a un oficial de la institución en idénticas circunstancias se les concede una pensión (CAPREDENA) de \$780.000.-

Afirma, que la Fuerza Aérea, sabiendo lo ocurrido con su representado, conforme a lo dispuesto en el fallo de revisión de la Excma. Corte Suprema, debió incluir entre los nombres de la placa conmemorativa, al de su representado, y al no hacer aumenta el agravio a su honor como oficial.

Agrega que al haber sido indultado su representado por Decreto Exento N° 1.611, de 30 de octubre de 1974, pudo salir del país, con rumbo a Canadá, sólo con visa de inmigrante y no como refugiado político, por lo que no le fue posible acceder a ayudas estatales para refugiados políticos, que se otorgaban a las personas que ingresaban en ese carácter, lo que provocó mayores penurias y dificultades en su diario vivir, sumado a la circunstancia de tener que aprender un idioma distinto al nativo, retardando su adecuación e inserción a esa sociedad que lo acogió y debiendo trabajar en oficios no acordes a su instrucción y rango, y tras varios años, poder volver a estudiar una carrera profesional, lo que indica, por lógica natural, agravaba su estado emocional y su ego, ya muy debilitado por los sucesos vividos.



Foja: 1

Asegura que por el hecho de haber sido condenado, a su regreso al país no pudo ejercer las acciones legales de que era titular, por tener pendiente una condena judicial, de modo que las demandas que pudiera presentar para obtener las correspondientes indemnizaciones, tenían este antecedente negativo que el Fisco siempre invocaría en contra de una persona condenada por delitos de Traición a la Patria, debiendo, en consecuencia, postergar hasta la actualidad su derecho a la reparación del daño, por lo que recién desde año 2016, al anularse por la Excma. Corte Suprema, mediante recurso de revisión, el proceso en el que fuera condenado, y dictara en su beneficio sobreseimiento definitivo, declarándolo absolutamente inocente de los cargos por los que fuera condenado, se encuentra en condiciones de solicitar el reparo a tanto daño que se le ocasionara.

Expone que adicionalmente a los hechos relatados, debió compartir el dolor de su joven novia que lo visitaba en la cárcel mientras estuvo privado de libertad, quien posteriormente le siguió a Canadá, en donde se casaron, privándose a su cónyuge de ejercer la medicina, carrera de la que se encontraba recién titulada a la fecha de los hechos. Explica que esta situación le forzó a formar una familia, que debió afrontar la vida con diversas dificultades, junto a si joven mujer, en un país extraño en donde nacieron sus hijos, lejos del arraigo natural de sus abuelos y amistades, lo que afectó su espiritualidad.

Refiere que a su regreso al país, en un caso de reconocimiento especial como profesional, pudo ser recontratado por algunas empresas nacionales e internacionales en los primeros años de su retorno a Chile. Sin embargo, atendida ya su edad, y la adaptación que requería, por su prolongada estadía de más de 15 años en el extranjero, no le fue fácil adaptarse a las nuevas condiciones que requería la vida civil, siéndole especialmente difícil su reinserción en medios laborales de su profesión, pudiendo desarrollar esporádicamente solo trabajos a honorarios; una cuestión de hecho que se sucede del agravio que se le ocasionara.

Señala que sin duda alguna, los daños más graves fueron los ocasionados a propósito de los tormentos, torturas y flagelaciones recibidas en los interrogatorios cuando se le formularon cargos, sobre hechos inexistentes que le obligaron a reconocer en declaraciones obtenidas de la forma indicada. Indica que la persistencia y brutalidad de los golpes recibidos en distintas partes de su cuerpo, por el solo hecho de no reconocer hechos en los que jamás participó ni existieron, le provocaron daños físicos y psicológicos que se han mantenido de por vida, dibujándose una mancha Gris en su joven espíritu y borradas sus expectativas de vida, causándole, impotencia, rabia, angustia, aflicción y dolor, que aún en estos días siente, cuando de diversas formas sufre alteraciones del sueño, le sobrevienen pesadillas, sudoración y crisis de pánico, que lentamente se van distanciando en el tiempo, sin que se borren u olviden jamás. Especial pena, dolor y sentimiento de traición le causó verificar que muchos de quienes le proporcionaron los martirios relatados, habían sido compañeros de





Foja: 1

escuela, de vivencias conjuntas y convivencia militar, cuestión que, con profunda pena, aún no entiende y relata en sus tertulias, cuando ello aparece procedente.

Afirma, que estos daños no son solo de carácter moral, en cuanto, causan una aflicción por pérdida patrimonial o generada por algún incumplimiento civil, que califica como una afrenta a la dignidad humana, un aflicción a su espíritu y a la naturaleza del Ser; daño que estima ha de regularse dadivosamente, entregando materialmente el máximo de recompensa posible de entregar, para mitigar un perjuicio inmutable y que perseverara hasta el fin de la existencia terrenal de la víctima. Refiere a fallos judiciales, que han indemnizado en más de 500 millones de pesos a herederos de víctimas directas, y, que, además, pudieron ejercer sus derechos en tiempo y forma, situación que la víctima, demandante de autos, solo ha podido dirigir desde fines del año 2017, y, además, por tecnicismos legales, postergado en los últimos dos años, 2017 y 2018, para presentar demanda. Finalmente refiere a las sentencias Rol N°2097-2004 y N°5946-2009 de la Excm. Corte Suprema.

Al folio 847, con fecha 3 de noviembre de 2020, se notificó al demandado, Fisco de Chile, por medio de don Juan Antonio Peribonio Poduje, como Presidente del Consejo de Defensa del Estado.

Al folio 858 comparece doña Ruth Israel López, abogado Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas 1687, Santiago, quien contesta la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en su contra, solicitando el rechazo de dicha acción por las excepciones, defensas y alegaciones que opone, con costas.

Al folio 893, comparece Antonino Pocorobba Castiglione, abogado en representación de la parte demandante, quien evacúa el trámite de la réplica reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda y solicitando sea acogida en todas sus partes, con costas.

Al folio 1060, comparece doña Ruth Israel López, abogado Procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien evacúa el trámite de la réplica, reiterando la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda.

Al folio 1078, se recibió la causa a prueba fijando los hechos sobre los que habría de recaer.

Al folio 1305, con fecha 6 de septiembre de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que comparece don Antonino Pocorobba Castiglione, abogado, en representación de don Jorge Adolfo Dixon Rojas, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de hacienda en contra del Estado de Chile, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, solicitando se declare que el daño ocasionado a su



Foja: 1

representado por agentes del estado asciende a la suma de \$1.200.000.000.- y se ordene a pagar dicha cantidad al demandado en favor de su representado; que la Fuerza Aérea de Chile, en un acto público deberá incluir una placa conmemorativa instalada en la Academia de Guerra de dicha institución, el nombre del subteniente don Jorge Adolfo Dixon Rojas, por ser unos mismos hechos lo que padeció el demandante de autos, al de sus compañeros de armas que se encuentran nominados en esa placa conmemorativa y que mitiga su honor de oficial de la fuerza aérea; debiendo el Fisco, instruir para tal efecto al Ministerio de Defensa, para el cumplimiento de lo resuelto; que la suma que se ordene pagar, deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de la presente demanda hasta su pago efectivo, más los intereses legales que correspondan por el mismo periodo señalado y que la demandada deberá pagar las costas de la causa.

Funda su demanda en los hechos y argumentos referidos en la parte expositiva de esta sentencia;

**SEGUNDO:** Que, al folio 858, comparece doña Ruth Israel López, abogada, Procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N° 1687, Santiago, quien contesta la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en su contra, solicitando el rechazo de dicha acción por las excepciones, defensas y alegaciones que opone, con costas. En subsidio, solicita sea rebajada el monto indemnizatorio pretendido y se conceda el pago de reajustes e intereses solo desde el cumplimiento de la sentencia, y se exima a su parte del pago de las costas, por tener motivo plausible para litigar.

En primer lugar, deduce la excepción de reparación integral alegando la improcedencia de la demanda por haber sido ya indemnizada la demandante, defensa que opone, atendida a las reparaciones ya otorgadas a las víctimas y a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, haciendo presente al efecto que la Ley N° 19.123, así como otras normas jurídicas conexas, en su conjunto han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a tales víctimas y familiares, estableciéndose al efecto los siguientes mecanismos: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas. Sostiene que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional, que busca la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Señala que en cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, indica que en término de costos generales para el Estado de Chile, dicho tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, las siguientes sumas de dinero: a) Pensiones: La suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 y de \$ 648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992; b) Bonos: La suma de \$41.910.643.367- asignada por



Foja: 1

la Ley 19.980 y de \$23.388.490.737.- por la Ley 19.992; d) Desahucio (Bono Compensatorio): la suma de \$1.464.702.888, asignada por la ley N°19.123; y e) Bono Extraordinario (Ley N° 20.874), la suma de \$23.388.490.737-

En síntesis, a diciembre de 2019, el Fisco de Chile ha desembolsado un total de \$992.084.910.400.- En la especie, indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992, y sus respectivas modificaciones, leyes que establecieron una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, a saber, una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; la suma de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años de edad, y la cantidad de \$1.549.422, para mayores de 75 años de edad. Agrega que sin se proyecta el pago de las pensiones Valech por los próximos 10 años, el demandante además recibirá la suma global aproximada de \$24.000.000.- por este concepto. Adicionalmente, consigna que el demandante recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Luego y en cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, y a los de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios y superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, indica que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH, se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a estas violaciones, con el propósito de entregar una satisfacción a las víctimas que en parte, logre reparar el dolor y tristeza y con ello reducir el daño moral. Entre ellas destaca la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.



Foja: 1

Afirma que el Estado de Chile también ha reparado integralmente al demandante por cuanto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 2 de septiembre de 2015, impuso al Estado de Chile una serie de obligaciones destinadas a reparar los perjuicios sufridos, las que se encuentran cumplidas en su totalidad. Indica que medidas de reparación dispuestas por la CIDH y que se encuentran cumplidas por el Estado de Chile y que benefician directamente al actor, son las siguientes: “a) El Estado debe continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación de los hechos del presente caso, de conformidad con lo señalado en los párrafos 155 y 156 de la presente Sentencia”. Indica que desde la dictación del fallo de la CIDH, el Ministro en visita Mario Carroza ha continuado con la investigación judicial de los casos de tortura asociados a los Consejos de Guerra, y se han llevado a cabo diversas diligencias, que no es necesario detallar para estos efectos. “b) El Estado debe realizar las publicaciones que se indican en el párrafo 162 del presente Fallo, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la presente sentencia”.

Explica que Conforme al párrafo 162, la Corte Interamericana estableció el deber de publicar el resumen oficial y la sentencia íntegra en el plazo de seis meses, contados desde la notificación, a través de los siguientes medios:

i) El resumen oficial de la sentencia por una sola vez en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, ii) El resumen de la sentencia en un medio de difusión interno de la Fuerza Aérea de Chile con la finalidad de que sea conocido por todos sus miembros, y iii) La sentencia íntegra, al menos por un período de un año, en el sitio web del Poder Judicial. La totalidad de dichas publicaciones se cumplieron entre noviembre de 2015 y abril de 2016. “c) El Estado debe, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la presente sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de conformidad con lo señalado en el párrafo 160 de la presente sentencia”.

Afirma que el reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado se llevó a cabo el día 7 de octubre de 2016, a las 11:00 horas. Explica que se escogió esta fecha especialmente pensando en que mediante este acto se cierra el ciclo de un año de trabajo en relación a esta sentencia, buscando dar total cumplimiento al fallo en el plazo ordenado por la Corte.

Al acto se invitó a las más altas autoridades de los tres Poderes del Estado, siendo encabezado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, el Presidente de la Excma. Corte Suprema, Hugo Dolmestch, el Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. A la ceremonia asistieron también el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldito Muñoz, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco, y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, entre otros, contando con la participación de más de 200 invitados. “d) El Estado debe, dentro del plazo de un año contado desde la notificación



Foja: 1

de la presente sentencia, develar una placa con la inscripción de los nombres de las víctimas del presente caso, de conformidad con lo señalado en el párrafo 164 de la presente sentencia”.

Sobre este punto consigna que el día miércoles 5 de octubre de 2016, en dependencias de la Academia de Guerra Aérea y con la presencia de las más altas autoridades del Estado, dentro de las cuales se destaca a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Hernando Muñoz; Defensa Nacional, José Antonio Gómez; Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco, y Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, se realizó la ceremonia de develación de la placa conmemorativa. También se contó con la asistencia de los Subsecretarios de Defensa, Marcos Robledo, y para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, además del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Jorge Robles. La ceremonia comenzó con el discurso de don Ernesto Galaz, en representación de las víctimas, que fue seguido por el de la más alta autoridad de la Fuerza Aérea de Chile, su Comandante en Jefe, General del Aire Jorge Robles. “e) El Estado debe poner a disposición de las víctimas del presente caso, dentro del plazo de un año contado desde la notificación de la presente sentencia, un mecanismo que sea efectivo y rápido para revisar y anular las sentencias de condena que fueron dictadas en la referida causa en su perjuicio, de conformidad con lo señalado en el párrafo 167 de la presente sentencia. Ese mecanismo debe ser puesto a disposición de las demás personas que fueron condenadas por los Consejos de Guerra durante la dictadura militar chilena, de conformidad con lo señalado en el párrafo 170 de la presente sentencia”.

Al respecto señala que el día 29 de abril de 2016 el Consejo de Defensa del Estado hizo a una presentación al Sr. Fiscal Judicial de la Excma. Corte Suprema solicitando la interposición de un recurso de revisión para dejar sin efecto la sentencia emanada del Consejo de Guerra 1-73. Acogiendo esta solicitud, con fecha 5 de mayo el Sr. Fiscal Judicial presentó el recurso de revisión sugerido por el Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de que las resoluciones dictadas por los consejos de guerra fueran anuladas, por existir antecedentes que acreditan de manera indubitada que ellas se basaron en declaraciones obtenidas mediante torturas aplicadas a los imputados dentro del procedimiento incoado en contra de ellos, en el que, además, se vulneraron las garantías de un debido proceso legal para finalmente ser condenados. Agrega que la Excma. Corte Suprema mediante sentencia del 3 de octubre de 2016, acogió el recurso de revisión, y resolvió anular las sentencias dictadas por el Consejo de Guerra en los autos Rol 1-73, por lo que estima cumplida la obligación referida.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo al demandante, no sólo han cumplido con todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que se han provisto indemnizaciones acordes con



Foja: 1

nuestra realidad financiera, las que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones. En ese sentido, cita lo resuelto la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 4742-2012 y 2400-2002. Asimismo, indica que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado, por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Estando entonces la acción deducida en autos basada en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizados los daños sufridos por la demandante.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones y derechos invocados en la demanda, toda vez que de acuerdo al relato del demandante, desde los hechos que denuncia hasta que la demanda fue notificada a su parte, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la dictadura militar.

En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, prevista en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil por cuanto entre la fecha en que se habrían hecho exigible el derecho a indemnización, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Después, en relación a la jurisprudencia sobre la prescripción, hace mención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en los autos N° 10.665- 2011 y al derecho internacional de los derechos humanos en los cuales no hay tratados que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes denominados como de lesa humanidad. Al respecto, cita La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención Americana de Derechos Humanos; y el Convenio de Ginebra sobre Tratamientos de los Prisioneros de Guerra, entre otros.

Concluye que no existiendo norma especial que determine el plazo de prescripción que debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que fija un plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto, solicitando, además, se tenga presente lo resuelto por la Corte Suprema en sentencia de 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

Expone, que la indemnización de perjuicios no tiene un carácter sancionatorio, por tratarse de una institución de contenido netamente



Foja: 1

patrimonial, de modo que como toda acción patrimonial, se encuentra expuesta a extinguirse por prescripción.

En tercer lugar y en cuanto al daño reclamado, y en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, controvierte expresamente el monto del daño moral demandado, señalando primeramente que los perjuicios reclamados no corresponden a daño mora y que a la época en que ocurrieron los hechos, el demandante se encontraba iniciando su carrera militar, en una situación muy lejana al retiro con derechos previsionales.

Hace presente que conforme a las características propias de la carrera funcionaria en las Fuerzas Armadas, no existe inamovilidad alguna que garantice la permanencia de sus funcionarios hasta su retiro, en circunstancia que sus integrantes se encuentran en permanente calificación, clasificación y revisión de sus aptitudes y desempeños. Estima que pretender la indemnización de perjuicios por daño moral conforme a los montos indicados, como si hubiere cursado toda la carrera institucional, incluyendo remuneraciones y jubilación, en circunstancias que a la fecha de su retiro detentaba entre 21 y 22 años de edad, resulta excesivo e improcedente.

Afirma que el actor no cumplía con los requisitos legales establecidos para ser acreedor de dichos derechos, resultando su petición desproporcionada e injustificada y que ésta no es más que una mera expectativa de un derecho cuya verificación dependería de una serie de requisitos legales y factuales, todos futuros e inciertos, que no existían a la época en que ocurrieron los hechos, en consecuencia, no pueden ser amparados por el derecho ni concedidos por la judicatura.

Hace presente, que la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 2 de septiembre de 2015 estableció montos de entre USD\$ 30.000 y USD\$ 25.000 a favor de cada uno de los demandantes por concepto de indemnización por el daño inmaterial ocasionado por la violación a los derechos humanos de las víctimas, por lo que en comparación a dichas sumas, califica la pretensión del demandante como injustificada.

Agrega que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificándolo, en términos económicos, como el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente de satisfacción.

Enfatiza que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberá ser justificada íntegramente. Al efecto, cita lo resuelto por la Il. Corte de Apelaciones, en los autos N° 6891-2013.



Foja: 1

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte del estado y que seguirá percibiendo a título de pensión y los beneficios extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad fue precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Seguidamente alega la improcedencia de la solicitud de inclusión en la placa conmemorativa instalada en la Academia de Guerra, en tanto jurídicamente no existe una acción general de reparación, como pretende el actor, que comprenda prestaciones de dar y de hacer, autónoma, distinta o independiente de la consabida y precisa acción civil de indemnización de perjuicios.

Sostiene que la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual está destinada exclusivamente a obtener el restablecimiento o la compensación del daño patrimonial o moral experimentado por una persona que ha sido víctima de un hecho ilícito, doloso o culposo, es decir, los márgenes de la acción están dados por los daños patrimoniales –daño emergente y lucro cesante- o extrapatrimoniales –daño moral-, resultando del todo improcedente cualquier solicitud de dar o hacer anexa, como la que ha efectuado el actor en estos autos. Reitera que pesar de que el demandante no compareció como actor ante dicha Corte, se encuentra beneficiado por las medidas de reparación simbólica que fueron decretadas y luego cumplidas por el Estado de Chile, pues, sin perjuicio de que su nombre no se encuentra expresamente incorporado en la mencionada placa conmemorativa -por no haberlo así decretado la CIDH- se anuló la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que condenó al actor y el Estado realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por la demandante en su libelo, esto es, desde la notificación de la demanda, por cuanto mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en autos, no existe ninguna obligación para la demandada, no existiendo por ende ninguna suma de dinero que deba ser reajustada, mientras que tratándose de los intereses demandados, explica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se haya retardado el cumplimiento de la sentencia;

**TERCERO:** Que al folio 893, comparece don Antonino Pocorobba Castiglione, abogado, en representación del demandante, quien evacúa el trámite de la réplica, señalando que los hechos denunciados no han sido negados ni objetados por la contraria, la que se ha limitado a solicitar el rechazo de la acción civil incoada, por diversas consideraciones.





Foja: 1

Respecto de la excepción de reparación integral, opuesta por la contraria, indica que la sentencia en que se funda esa parte de la defensa son además de antiguos y de doctrina que no es actual, descontextualizados a la relación de sucesos referidos en ésta causa.

Agrega que el proceso reparatorio contiene beneficios generales, y no precisamente para las víctimas directas, sino para sus familiares y en su virtud no puede eximirse de indemnizar el daño particular ocasionado personalmente a la víctima directa y en tal calidad no le alcanzan los efectos de la Ley 19.123 y no se beneficia de ella. Agrega que la pensión básica general del IPS en caso alguno puede cubrir los daños morales cuya indemnización se solicita.

En cuanto a los beneficios generales referidos por la contraria, indica que su representado nunca ha utilizado los beneficios del programa PRAIS, pues dispone de Isapre y plan conjunto con su mujer y tampoco ha recibido beneficio de vivienda ni educación, sólo su hijo a quien se financió parcialmente su carrera de Ingeniería Civil.

Finalmente, respecto de la indemnización y medidas reparatorias dispuestas por la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, indica que dichas indemnizaciones corresponden a la demora en acceder a la justicia, evaluación que no se hizo en atención a los vejámenes y daño individual que se infirió a las víctimas y, por todo lo anterior, solicita sea desestimada la defensa de la demandada sobre este punto.

En cuanto a la prescripción alegada, indica que nada se dijo en la contestación sobre las acciones patrimoniales civiles de carácter público y que se omitió también, el respeto a los principios de derecho internacional, que el estado, se obliga a cumplir, como se indica en los estatutos de la Organizaciones Internacionales que integra el país, tales como ONU, OEA, etc. Invoca como fundamento de su postura los artículos 27 y 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales, a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso Loayza Tamayo, de 27 de noviembre de 1998 y la sentencia de la ltma Corte de Apelaciones de Santiago, dictada en causa Rol 6715-2002. Indica que no es efectivo que se aplique la legislación común a los actos de derecho público y que en caso de estimarse prescriptible la acción indemnizatoria que intenta, su plazo debe necesariamente computarse desde la sentencia de la Excma. Corte Suprema que anuló el proceso penal por el que fue condenado su representado y que desencadenó los abusos y vejámenes padecidos, estimando que recién en octubre del año 2016 nace el derecho del actor, para solicitar la reparación del daño causado, en virtud de la sentencia que anuló el proceso por el cual se le condenó, y luego absolvió de los cargos formulados indebidamente.

En cuando a lo referido en la contestación respecto del monto demandado, indica que los beneficios generales, no pueden constituir la reparación de un daño personal y especial, como es el de la víctima directa de este caso y que el monto a que se acceda será solo un reconocimiento a la víctima, que le permita tan solo mitigar, jamás



Foja: 1

compensar, la producción de un daño que le acompañará en toda su existencia, por lo que estima la suma pretendida como ajustada a derecho.

En relación a la alegación de improcedencia relativa a la solicitud de inclusión en la placa conmemorativa instalada en la Academia de Guerra, indica que dicha omisión, contribuye en afectar el honor miliar de su representado. Explica que la reparación que ordenó el fallo de la Corte Interamericana, en particular las referidas en su literal "d", por lo que estima que su cumplimiento ha sido parcial.

**CUARTO:** Que, al folio 1060 consta el escrito de duplica, en que comparece doña Ruth Israel López, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, reiterando las alegaciones efectuadas el escrito de contestación;

**QUINTO:** Que, mediante resolución de fecha 12 de mayo de 2021, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos ahí señalados, término que comenzó a correr con fecha 20 de diciembre de 2021;

**SEXTO:** Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió la siguiente prueba documental:

- 1.- Certificado N° 24.412/25 emitido por don Leopoldo Moya Navarro General de Aviación del Comando de Personal, de 12 de diciembre de 2013, que da cuenta que don Jorge Adolfo Dixon Rojas, obtuvo su título de oficial de la Fuerza Aérea de Chile, al ser nombrado como Subteniente en el Escalafón de Línea, de armas, Ingenieros, con fecha 1 de enero de 1973.
- 2.- Certificado de título de Oficial de la Fuerza Aérea, en el Escalafón de Ingenieros con el Grado de Subteniente, conferido al alférez alumno don Jorge Adolfo Dixon Rojas, con fecha 1 de enero de 1973.
- 3.- Hoja de servicios del Subteniente en retiro don Jorge Adolfo Dixon Rojas, de la que consta que con fecha 30 de noviembre de 1973 se dispuso por DS N°810 de 7 de noviembre del mismo año, su retiro absoluto.
- 4.- Publicación de Decreto Supremo N° 810 que dispone el retiro absoluto del servicio de la Fuerza Aérea de Chile, con fecha 30 de noviembre de 1973, del Subteniente don Jorge Dixon Rojas, entre otros.
- 5.- Certificado N° 28 emitido por don Osvaldo Villaseca Reyes, Conservador (S) del Archivo Nacional, de fecha 28 de abril de 2005, que da cuenta que don Jorge Adolfo Dixon Rojas se encontró registrado en el libro de prisioneros de guerra de los años 1973-1974, folio 5 N° de orden 226, correspondiente a la Fiscalía de Aviación, Causa Rol N° 1-73, por el artículo 274. Figura como fecha de ingreso el 24 de noviembre de 1973 y como fecha de egreso el 29 de junio de 1974.
- 6.- Copia de sentencia, de septiembre de 1974, emitida por don José Berdichewsky Scher, General de Brigada Aérea, Comandante del Comando de Combate y Juez de Aviación, que modifica la sanción aplicada por el Consejo de Guerra a don Jorge Dixon Rojas, a 541



Foja: 1

días de reclusión militar menor en su grado medio, más las accesorias legales.

7.- Copia de Decreto Exento N° 1611 de 30 de octubre de 1974 que remite en la parte no cumplida el saldo de las penas corporales a que se encontraba condenado don Jorge Adolfo Dixon Rojas, por sentencia de 30 de junio de 1974, dictada por el Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile y de 26 de septiembre de 1974 por el Comandante del Comando de Combate de la Fuerza Aérea de Chile y Juez de Aviación, en la causa Rol N° 1-73.-

8.- Nómina de personas reconocidas como víctimas, confeccionada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en la que figura don Jorge Adolfo Dixon Rojas inscrito bajo el número 7407.-

9.- Copia de constancia emitida por el Doctor Jorge Cristián Barría Iroume, Médico-psiquiatra, con fecha 2 de mayo de 2006, en la que se certifica que don Jorge Dixon Rojas se encuentra en tratamiento desde el mes de junio de 2002 por depresión mayor, distimia depresiva crónica y síndrome post traumático. Indica que las experiencias de traumatización extrema tienen impacto en la personalidad por la profunda pérdida personal (del tipo de un duelo complejo) que implican. La persona debe salir adelante pero suele pagar un costo en síntomas emocionales o psiquiátricos (a veces también de patología física) que pueden requerir tratamiento especializado posteriormente, como en este caso. Agrega que el paciente ha estado en terapia psicológica semanal por cuatro años, con tratamiento psicofarmacológico y control médico de mantención cada dos meses hasta la actualidad.

10.- Copia de resumen oficial emitido por la Corte Interamericana de la sentencia dictada con fecha 2 de septiembre de 2015 en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile.

11.- Copia de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 2 de septiembre de 2015, en la causa Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile.

12.- Copia de la sentencia dictada por la Segunda sala de la Excma Corte Suprema con fecha 3 de octubre de 2016, en la causa Rol 27.543-16.

13.- Certificado de nacimiento de Thomas Pablo Dixon Pedrals, de fecha 23 de septiembre de 1988.

14.- Certificado SG-3106/2016 emitido por don Jerome Mac Auliffe Franklin, Secretario General de la Universidad Técnica Federico Santa María, con fecha 24 de agosto de 2016, que da cuenta que Thomas Pablo Dixon Pedrals aprobó con fecha 23 de enero de 2015 su examen de grado en virtud de lo cual se le confirió por decreto de rectoría N° 2269-2015 el título profesional de Ingeniero Civil Electrónico.

15.- Copia del libro Aviación contra Bachelet y Otros, escrito por don Jorge Dixon R. Primera edición agosto 2013.

16.- Informe Psicológico emitido por don Germán Morales, Psicólogo Clínico UC, en el que se indica que la experiencia de detención, tortura y Consejo de Guerra sin las garantías de un debido proceso, han



Foja: 1

generado un enorme daño psicológico en el demandante, su esposa y sus hijos, todos los cuales han requerido atención en terapia familiar, de pareja/padres, psicoterapia individual y tratamiento psiquiátrico. En este sentido, Jorge y su familia han sido objeto de lo que se conoce como procesos de traumatización extrema, descrita ampliamente en la literatura científica internacional y que se define cuando las personas que han sido violentadas por la acción del Estado -a través de una dictadura en este caso- que busca la destrucción de quienes ostenten una identidad política, étnica y/o religiosa diferente a quienes ejercer el poder, generando daños físicos, psíquicos y psicosociales de compleja y limitada reparación. En particular, respecto de don Jorge Dixon, el daño psicológico y psicosocial está asociado a la detención y tortura, prisión política, exilio y retorno, que le impidieron continuar su carrera militar, con las consecuencias sociales y económicas y generaron inestabilidades emocionales en él y su familia.

17.- Copia de sentencia dictada por la sexta sala de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 13.639-2020, con fecha 20 de junio de 2022;

**SÉPTIMO:** Que, a fin de acreditar los fundamentos de su defensa, la parte demandada rindió la siguiente prueba documental:

- Copia de oficio emitido por don Alexander Suarez Olivares, Jefe (S) del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, que informa detalles de beneficios recibidos por el demandante.

**OCTAVO:** Que, son hechos de la causa, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1.- Que, don Jorge Dixon Rojas, fue detenido y sometido a prisión política entre el 24 de noviembre de 1973 y el 29 de junio de 1974, oportunidad en la que fue sometido a torturas y apremios ilegítimos. Fue dispuesto su retiro absoluto de la Fuerza Aérea de Chile, el 30 de noviembre de 1973.

2.- Que, don Jorge Dixon Rojas, fue condenado mediante sentencia dictada el 26 de septiembre de 1974, en calidad de autor del delito de incumplimiento de deberes militares, descrito y sancionado en el artículo 299 N° 3 del Código Militar, a 541 días de privación de libertad y, posteriormente, mediante Decreto Exento 1611 de 30 de octubre de 1974 del Ministerio de Justicia, remitida su pena en la parte no cumplida.

Posteriormente, mediante sentencia dictada con fecha 3 de octubre de 2016 por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema, se invalidó la sentencia que lo condenaba y fue absuelto por haber sido aprobada satisfactoriamente su completa inocencia.

3.- Que, don Jorge Dixon Rojas, se encuentra calificado como víctima en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Valech, bajo el N°7407.

4.- Que, don Jorge Dixon Rojas, ha obtenido los siguientes beneficios de reparación: Pensión Ley N°19.234, \$35.498.153.-; Bono Ley N°19.992, \$3.000.000.-; Aporte único Ley 20.874, \$1.000.000.-; Aguilandos por período de \$617.491.- esto es un total pagado de



Foja: 1

\$40.115.644.- lo anterior, al mes de noviembre de 2020 y una pensión Ley 19.234 por \$ 183.846.-;

**NOVENO:** Que, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por don Jorge Dixon Rojas en contra del Fisco de Chile, en atención al daño sufrido producto de su detención y torturas en manos de agentes del Estado, quien fuera reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos, por la denominada Comisión Valech, solicitando una indemnización ascendente a \$1.200.000.000 por concepto de daños y perjuicios.

Por su lado, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, en base a diversos argumentos, oponiendo excepción de reparación integral, por cuanto el actor ha sido reparado mediante desagravios de carácter simbólico y en programas; y haber operado la prescripción de la acción, tanto de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil como de 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente acción, solicita que el daño sea regulado teniendo en consideración los beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado;

**DÉCIMO:** Que, en cuanto a la denominada “excepción de reparación integral” que opone la demandada, por haber sido resarcida la actora en conformidad a la Ley N° 19.123, cabe señalar que si bien consta en del Instituto de Previsión Social, que don Jorge Dixon Rojas obtuvo beneficios de reparación contemplados en las Leyes N° 19.992, 19.234 y 20.874, a noviembre de 2020, por un total de \$ 40.115.644.- y una pensión conforme la Ley 19.234 por \$183.846.- lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley, que dispone: “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta jueza- con una reparación meramente simbólica.

No obstante lo expuesto, la reparación que haya hecho el Estado en relación a las víctimas de violaciones a los DDHH, no puede dejar de considerarse al momento de determinar el monto de los perjuicios, por cuanto parece razonable que estas medidas tengan un efecto en la extensión del daño cuya indemnización ahora se demanda;



Foja: 1

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Seguidamente y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, cabe decir que, en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

De otro ángulo, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que "... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han



Foja: 1

investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada;

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión del actor, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Es de toda certeza que los hechos establecidos en el motivo octavo precedente, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Jorge Dixon Rojas.

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales. Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural...”; “... su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena.”

El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.

Por lo tanto, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos habrá que estarse también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Así, de acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede



Foja: 1

desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario;

**DÉCIMO TERCERO:** Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama la demandante.

A todo, cabe precisar que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser acreditado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral, ocasionado por el hecho dañoso.

Igualmente puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

“El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88);

**DÉCIMO CUARTO:** Que, en orden a acreditar su existencia y evaluación, el demandante rindió prueba documental, previamente referida, que da cuenta de la efectividad de los hechos relatados.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, al momento de determinar el monto de la indemnización, se tendrá presente que resulta un hecho no controvertido que el actor fue víctima de violación a los DDHH, sin embargo, la prueba rendida, no resulta del todo completa para a este tribunal a fin de acceder a la demanda en los términos y montos solicitados; habida consideración que la documental acompañada al proceso es insuficiente para tener por acreditado el relato de los apremios ilegítimos contenido en su demanda, sin que haya acompañado otros medios de prueba que acrediten dichas circunstancias fácticas.

Con todo, la calidad a que se ha hecho mención en el primer párrafo de este considerando, unido a la prueba documental en que se





Foja: 1

consignan que efectivamente dejó secuelas para el demandante los vejámenes sufridos permiten a este tribunal fijar prudencialmente el monto de la indemnización en la suma de 40.000.000.- (cuarenta millones de pesos);

**DÉCIMO SEXTO:** Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada;

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistrada que la parte demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47 y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por la demandada;

II.- Que se acoge, parcialmente, la demanda de lo principal de fecha 12 de septiembre de 2020 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de cuarenta millones de pesos (\$40.000.000.-) a favor del demandante don Jorge Dixon Rojas, con más los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo sexto precedente;

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Notifíquese, regístrese, consúltese si no se apelaré, y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Lidia Patricia Hevia Larenas, Jueza Suplente

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de Noviembre de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WYPCXCFWJHL

